



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

HEMEROTECA DE LA UMA

Noticias

[Volver al listado](#)

Menú

[Búsqueda rápida](#)

[Búsqueda avanzada](#)

[Búsqueda Profesional](#)

[Ayuda](#)

[Medios](#)



Chechenos en Baiona

Gara | 20/11/2002 | País vasco | Opinión Iritzia | | 10

Con motivo del nuevo debate descentralizador impulsado por el gobierno de derechas francés, los diferentes actores de Iparralde van tomando posiciones ante el nuevo ciclo reivindicativo que se avecina. Así, las diferentes propuestas sobre las fórmulas de institucionalización del País Vasco se van poniendo encima de la mesa y, si bien no existe un consenso claro, una serie de elementos son asumidos por todos los representantes vascos, independientemente de su ideología y de su identidad. Y uno de ellos es la necesidad de garantizar el desarrollo de la **lengua** vasca.

En este sentido, el presidente del Consejo de Electos del País Vasco institución que aglutina a la totalidad de cargos políticos de Iparralde ha señalado que propondrán la modificación del artículo 2 de la Constitución, en el que se dictamina que el francés es la única **lengua** de la República. Así, el responsable de la inclusión de este artículo en la década de los 90 reconoce que su enmienda se ha utilizado desde entonces como forma de cercenar los derechos de aquellas personas que desean expresarse en euskera, occitano, bretón, corso, etc...

No es ésta una reflexión nueva. Desde 1992, más de 500 representantes de estos territorios ponen en marcha una dinámica colectiva que se concreta en 1997 con la elaboración de un Proyecto de Desarrollo que propone una serie de medidas que deberían garantizar la supervivencia de un País Vasco profundamente desvertebrado. Entre estas propuestas destaca la necesidad de garantizar la señalización bilingüe en todas las infraestructuras públicas. Así, desde el momento en el que este Proyecto es asumido por el Departamento de los Pirineos Atlánticos, la Región de Aquitania y el Estado, se reconoce oficialmente uno de los compromisos que había incorporado François Mitterrand en la proposición número 54 de sus 110 Propositions pour la France. Y si ésta fue la única de las propuestas que no cumplió tras acceder a la Presidencia, en 1997 parecía que por fin se asumía por parte de la Administración uno de los mínimos que posibilitasen la supervivencia de la **lengua** vasca.

En cualquiera de los casos, la falta de concreción de las 96 propuestas del Esquema de Ordenación cataliza entre 1997 y 2000 las sinergias que permiten la constitución de un movimiento unitario que reclama en las calles de Baiona la creación de un departamento País Vasco como única forma de garantizar la puesta en marcha de las medidas del Proyecto. Este movimiento, constituido por un centenar de personalidades de todas las ideologías e identidades, y con la destacada participación de cargos electos socialistas, abertzales, del UDF, el RPR y los verdes, realiza el 9 de octubre de 1999, por boca de su portavoz, Renaud D'Elissagaray, un llamamiento a la desobediencia civil para lograr que la Administración diese el brazo a torcer.

Durante seis meses, los representantes de este movimiento comienzan a definir su estrategia desobediente. Sin embargo, ésta no llega a concretarse ya que el movimiento unitario pronto se disgregaría.

En cualquiera de los casos, sobre la base de este aporte legitimatorio, en 2000 nace otro movimiento, algunas de cuyas acciones sonrojaron a las autoridades, concitando el apoyo explícito o cuando menos la sonrisa cómplice de la mayoría de los representantes electos del País Vasco. La estrategia del colectivo Demo es doble e incide directamente sobre los procesos que habían movilizado a la sociedad civil vasca durante los 90. Por una parte, se centran en la reivindicación institucionalizadora, desde la que se explican acciones como el robo de los escaños de los electos vascos en la sede del Consejo General del Pirineo Atlántico o la sustracción del libro de actas del Biltzar de Lapurdi en el que el diputado Garat reclamaba la creación de un departamento vasco en 1790. Por otra parte, realizan actos desobedientes para lograr que se concreten los proyectos de desarrollo diseñados por la sociedad civil y electos vascos entre 1992 y 1997. A este respecto, serán innumerables las acciones que tratan de subsanar por la vía de los hechos la incompetencia, desidia o desafío de la Administración al negarse a cumplir con sus compromisos.

Lo importante de este tipo de estrategia es que reflejará al máximo las potencialidades de la desobediencia civil: generan incertidumbre en una administración impotente que no sabe cuándo y cómo será nuevamente ridiculizada; provoca la solidaridad de la población ante la popularidad y metodología de sus acciones; y en definitiva, supone un auténtico desafío, ya que suplanta a la autoridad en el cumplimiento de sus obligaciones.

Este es el marco desde el que se explican los juicios que se están desarrollando a lo largo de estas semanas en Baiona sentando en el banquillo de los acusados a varios militantes desobedientes por poner en práctica una de las propuestas consensuadas entre la sociedad civil, electos de Iparralde y la Administración: la señalización bilingüe. Y la respuesta de las autoridades está mostrando el verdadero rostro de la intransigencia. Los hechos cantan: el gerente de la estación de Baiona entiende por señalización bilingüe el que los carteles estén en francés e inglés; la sala que juzga a uno de los Demo no permite que éste se exprese en su **lengua materna**, el euskera; y cuando finalmente se ponen traductores, éstos lo son de español.

Hasta aquí, desgraciadamente, no hay más que un relato de unos hechos a los que se está bastante acostumbrado a ese lado de la frontera. Sin embargo, el otro día se dio un salto cualitativo. En este caso no había secuestrados, las bombas adosadas al cuerpo se sustituían por camisetas amarillas, el silencio que probablemente presidiría el teatro Dubrovka contrastaba con los compases del Euskal Herrian Euskaraz y, en vez de 800, sólo eran 300 las personas que se encontraban en la sala del tribunal de Baiona. Pero eso sí, la respuesta policial fue muy simbólica: gasear a los presentes, no sólo a los acusados, sino al público, a los ujieres, a los periodistas, a sacerdotes... hasta a la jefea. Que a los euskaldunes se los tratase, al igual que a los chechenos, como a extranjeros en su propia tierra, ya lo sabíamos... Ahora bien, que la respuesta de la Administración se guíe por las pautas que se marcan en el Kremlin, eso ya da más miedo... -

Igor Ahedo - Doctor en Ciencias Políticas